

LA GUERRA DEL CONSENSO

LA idea de consenso brotó, entre otras razones, de la creencia por parte de los partidos políticos recién legalizados de que el Gobierno formado y creado por el señor Suárez representaba una garantía válida de que España no caería en el desastre. A medida que esta garantía va perdiendo valor, e incluso van creciendo las sospechas de que este Gobierno puede llegar a inclinar la situación hacia el desastre, se cuestiona cada vez más la conveniencia de seguir sosteniendo el consenso, que es una forma de sostener al Gobierno. El Partido Socialista lo ha puesto en trance serio con varias acciones —la más espectacular, la retirada del señor Peces-Barba de la ponencia constitucional— y el Gobierno y su partido filial, la UCD, han acudido con una rapidez de segundos a volver a levantar la sospecha de desastre inminente y la urgencia de soldar el consenso roto para evitarlo. Es su negocio. Mantuvo entonces la posibilidad del desastre a la derecha: el fantasma del "golpe" la vuelta a la dictadura, el final de la democracia. Y el caballo de Santiago pisoteando a las hordas rojas. Y alza ahora el espectro de las mismísimas hordas rojas, de la guerra civil. Con lo que al mismo tiempo guía el ojo a la derecha, con la que mantiene otro tipo de consenso, como diciéndola que es él, efectivamente, la mejor muralla contra la horda, y advierte a los que rasgan el consenso de que, de verdad, puede convertirlos de nuevo en horda.

¿QUE gritos de horror ucedistas y gubernamentales cuando escucharon aquello de que el Partido Socialista realizaría "acciones de masas" para presionar a favor de la convocatoria de elecciones municipales! ¿Otra vez el pueblo en la calle? Para eso el Gobierno y la UCD tienen a Martín Villa, que declaró a la agencia Logos: "El Gobierno aplicará estrictamente la Ley vigente sobre reunión y manifestación en las movilizaciones de masas convocadas por el PSOE". Ha heredado la calle que antes perteneció a Fraga: ahora es suya. ¿Por qué sólo aplicar la ley —y la palabra "estricta" añade como un punto de severidad y de hostilidad a la cuestión— a las movilizaciones del PSOE? El Partido Comunista también las ha evocado. Si es que el se-

ñor Tamames, esta vez, está de acuerdo con la dirección, cosa que nunca se sabe. El señor Tamames había declarado en Zamora: "Si el 4 de abril el Gobierno no da una serie de razones convincentes en el Congreso sobre la crisis que atraviesa y no da a conocer un calendario exacto de elecciones, el Partido Comunista acudirá a la movilización de masas". Pero, ya se sabe, el señor Tamames es un *enfant terrible*, no hay por qué hacerle demasiado caso, etcétera. Además, pone un plazo —el 4 de abril—; y, además, el PCE cree más en la posibilidad del consenso. Hay vías de pacto con él: no pretende la alternativa de poder. En efecto, en el largo Pleno sobre elecciones municipales, el PCE retiró su enmienda a la totalidad y se conformó con lo que le dieron, respecto a la forma de elegir alcaldes (una fórmula que, por cierto, no es mala y es más justa que la anterior: lo que ha conseguido, para sí y para el país, no es poco). La Ley del señor Martín Villa va directa a asustar a los socialistas y a tranquilizar a las derechas.

PERO, ¿quién ha dicho que las acciones de masas o las movilizaciones populares estén fuera de la ley? Aparte de la UCD y sus

escribanos, nadie. Las manifestaciones, las concentraciones y los mítines son legales, y el PSOE y el PCE —o el señor Tamames— tienen derecho a usar de ese resorte político. No menos que la UCD cuando se pone "en marcha" y convoca a sus leales. Pero los gritos de horror estaban calculados, desde los del señor Martín Villa y su fuerza de ley y orden hasta el joven señor Cisneros, que evoca los fastos del viejo señor Cisneros —el cardinal— cuando convoca en torno suyo a las "gentes de ordenanza" —"pardos" y "lasquetetes"— para tocar a rebato en defensa de su Gobierno amenazado y de su ponencia rota. ¿Qué utilización más mezquina del proyecto de documento emitido simultáneamente por los socialistas, en el que se declaran marxistas y partido de clases! La declaración oficial de UCD es odiosa. "Cuando se propone la movilización popular y callejera como instrumento de presión política, se está cometiendo una grave temeridad y su actuación, de prosperar, sería la típica de las actitudes marxistas". La vieja repulsa visceral se transparaece en seguida. Apenas se rasca la frágil piel del animalillo centrista, sale la áspera pelambre del lobo antimarxista. Pero, ¿no sabían estos caballeros a quiénes estaban legalizando, con quiénes estaban pactando, a quiénes estaban recibiendo y con quiénes concordaban? ¿Es tal su ignorancia que han tenido que esperar un documento de paso para enterarse? "Dos días después de que un documento del PSOE calificara a este partido como marxista y clasista, los dirigentes socialistas han querido desviar la





Quizá el Gobierno no sabe qué artefacto está montando con el retraso inaudito de la Constitución, con el chalaneo de los pactos de la Moncloa. El presidente Suárez, junto a Felipe González.

atención de estos pronunciamientos y de las críticas consiguientes, lanzando un ataque demagógico falso e irresponsable contra la UCD y el Gobierno... ¡Ah!, pero dos días después el jefe Suárez deambulaba durante casi dos horas por los pasillos del Congreso —los "pasos perdidos"— con el jefe de estos marxistas clasistas, irresponsables y demagogos, además de falsos, para tratar de reparar su maltrecho consenso. Para tratar de reparar su consenso. Quizá lo esté ya a estas horas. Se dice que la paz —aunque vigilante y tensa— se ha hecho de nuevo. No habrá bastado ese compromiso vergonzante de fecha para las elecciones, que se hizo al filo de la madrugada de la sesión más larga del Congreso, de que se convocaran cuando se haya aprobado definitivamente la Constitución. Con la calculadora en la mano, y teniendo en cuenta pasos y trámites, se establece que habrá municipales dentro de un año, mes más o mes menos. Quizá el Gobierno no se dé bien cuenta de la bomba que tiene bajo sus pies, utilizando las viejas estructuras de alcaldes y concejales en pueblos y ciudades que los detestan —en muchos casos— y los sienten pesar sobre ellos; quizá en algún momento puedan surgir acciones de masas contra esos Ayuntamientos eternos y, repitamos que en muchos casos, tal vez depredadores e impunes. Quizá el Gobierno no sabe qué artefacto está montando con el retraso inaudito de la Constitución, con el chalaneo de los pactos de la Moncloa y con los gritos por un consenso perdido, que lleva por vías unilaterales. Quizá no sabe cómo se está dañando a sí mismo con la inconcreción de la política económica, y cómo no bastan los gritos de que "todo sigue igual" para encubrir aquello que es diferente: porque si siguiera igual no ha-

bría tenido necesidad de cambiar de ministros. Quizá el Gobierno no sabe que no puede invocar el desastre y el catastrofismo, porque se está convirtiendo él mismo, para la derecha y para la izquierda, para los empresarios de todas clases —grandes, medios y pequeños—, a los que no ha bastado la incorporación repentina del señor Rodríguez Sahagún, y para las clases populares, que ven sus salarios carcomidos, el paro progresando rápidamente, la amenaza de la flexibilización de las plantillas y la lejanía de las elecciones. Dicen que el señor Fraga está ya preparándose para entrar en el Gobierno, y dicen también que en sustitución del maltrecho señor Oreja, a quien se le ha derrumbado —entre tanto desastre, entre tanta catástrofe— la política internacional: quizá no



sepa el Gobierno que, con ello, habrá perdido el último prestigio que le quedaba como capaz de equilibrar el país por un hipotético centro.

ES cierto que el Partido Socialista ha tenido críticas en estos días, y muy serias. Las ha tenido, como es obvio, de los grandes corifeos, de los escribanos del Gobierno-UCD. Con todo su énfasis en los temas de marxismo, clases, movilización popular, etcétera, con esa ficción de sorpresa que consiste en hacer el guiño a la derecha. Las ha tenido también de sectores más serios y más de conciencia. Del Partido Comunista, que no tiene ninguna seguridad de que sea inviable esta situación y cree que es mejor continuar trabajando desde dentro —desde las ponencias, desde los acuerdos: desde el consenso— que dejarlo perder todo. Es una posición muy política y muy actual que conviene tener muy en cuenta. Las ha tenido también de analistas políticos objetivos y distanciados de influencias de poder y de partido, más o menos sustentados por la misma teoría: la de que una ruptura puede ser más grave que una larga paciencia.

PERO tampoco la opción es un disparate. No es solamente la fabricación continua de la alternativa de poder, que puede tener un sustento muy sólido en la muestra visible de oposición a lo que está sucediendo; ni es tampoco solamente una denuncia de que el consenso ha sido roto solapadamente por la UCD y, por lo tanto, no hay ya nada que conservar, sino advertir que no se puede continuar el juego. Es, sobre todo, por marcar una desolidarización con lo que está sucediendo y, sobre todo, una distancia con lo que no está sucediendo. Que la responsabilidad del desastre, si sobreviene, no alcance a todos.

LA dificultad esencial estriba en saber si la enorme delicadeza de la situación por la que estamos atravesando puede mejorar por la llamada de atención del Partido Socialista y por su constitución en reserva, o si, por el contrario, puede precipitar al país en una situación peor. Nadie puede responder a esa pregunta honestamente. El Partido Socialista toma un riesgo, pero ese riesgo es absolutamente político y absolutamente lícito. Quizá la brutalidad de las respuestas que ha tenido indique que es mucho más acertado que erróneo. Ha ayudado, por lo menos, a un desenmascaramiento de la situación política. Y una de las cosas más graves que estaban y que están sucediendo aún es la existencia de esa máscara. ■